29. El proyecto de artículo 7 constituye una progresión lógica del proyecto de artículo 6. El término «submitting», en el texto inglés del párrafo 1 del artículo 7, es no obstante algo conciso; posiblemente, lo que debería entenderse fuera «subjecting» o «permitting the subjection of». En la variante A del párrafo 2, según se desprende claramente del uso del término «im-pleads», se puede prever una acción judicial, sin que suponga una jurisdicción obligatoria sobre el Estado extranjero. La variante B trata de las circunstancias en que habría jurisdicción sobre un Estado extranjero y se refiere al tipo de organismos y de bienes que gozarían de inmunidad. A juicio del Sr. Pinto, la variante B no se contrapone a la variante A sino que la completa.

30. Si bien el orador está dispuesto a aceptar que el proyecto de artículo 7 se remita al Comité de Redacción, cree que se deben seguir estudiando ciertos puntos. En particular, la frase de la variante A «siempre que con esa acción se implique de hecho a ese otro Estado» tal vez no sea bastante completa. Es preciso introducir la idea de un nexo jurídico que afecte a los intereses del Estado extranjero que han de ser protegidos por la inmunidad.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

1655.ª SESIÓN

Miércoles 20 de mayo de 1981, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Aldrich, Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Šahović, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.1¹, A/CN.4/340 y Add.1, A/CN.4/343 y Add.1 a 4)

[Tema 7 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO 7 (Reglas de competencia e inmunidad jurisdiccional)² (continuación)

1. El Sr. FRANCIS comprueba que, como ha observado el Sr. Tabibi (1653.ª sesión), el Relator Especial se ocupa del desarrollo de una nueva rama del derecho internacional. En efecto, mientras la Convención de Viena de 1961³ y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares⁴ se limitan a los aspectos de las relaciones interestatales vinculados con la representación, la labor que ha iniciado ahora la Comisión es de un alcance mucho más amplio, puesto que se extiende a todos los aspectos de esas relaciones que resultan afectados por la inmunidad del Estado.

2. El Sr. Tabibi ha dicho asimismo que la labor de la Comisión contribuirá, entre otras cosas, a proteger la soberanía permanente de los países del tercer mundo sobre sus recursos naturales, con lo cual se fomentará también la protección de las inversiones extranjeras en el contexto más amplio del comercio internacional. Pero esa labor tiene además otra dimensión, puesto que contribuirá a promover las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados y a evitar conflictos y disensiones. Esto es importante, habida cuenta de la declaración del Sr. Tsuruoka (1654.ª sesión) de que la doctrina de la inmunidad absoluta del Estado ya no constituye la doctrina jurídica aceptada en el Japón; y como se desprende de la práctica de los Estados, lo mismo puede afirmarse de otros países. Por consiguiente, dado que el número de Estados que tienden a adoptar un planteamiento más restrictivo de la inmunidad estatal va en aumento, es razonable y oportuno que la Comisión trate de codificar el derecho en consecuencia. El orador tiene la seguridad de que la Comisión estará a la altura de esa tarea.

3. Por lo que respecta al método de trabajo de la Comisión, el Sr. Tsuruoka ha subrayado la importancia de adoptar un método inductivo, de lograr una comprensión realista del mundo contemporáneo y de la evolución progresiva y de que exista la voluntad de transigir. Todo ello es esencial para el feliz resultado de los trabajos de la Comisión. A este respecto, conviene tener debidamente en cuenta el apartado *b* del párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena de 1961, con arreglo al cual se admite que los Estados «se concedan recíprocamente un trato más favorable que el requerido» en las disposiciones de esa Convención. Esta disposición podría ser útil a la Comisión al tratar de la cuestión de la transacción.

4. Sus observaciones sobre el proyecto de artículo 7 serán necesariamente pocas, puesto que, como ha señalado Sir Francis Vallat (1653.ª sesión), no es posible adoptar una posición respecto de ese artículo sin examinar primero los proyectos de artículos 8 a 11 inclusive. Por supuesto, el proyecto de artículo 7 es una consecuencia lógica del proyecto de artículo 6. A este respecto, el Sr. Ushakov, refiriéndose en la sesión anterior a la cuestión general de la fuerza relativa de la inmunidad y de la soberanía territorial, ha afirmado que no existe la soberanía absoluta y que la inmunidad, en

¹ *Anuario...* 1980, vol. II (primera parte).

² Véase el texto en la 1653.ª sesión, párr. 18.

³ Véase 1654.ª sesión, nota 4.

⁴ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 596, pág. 392. Denominada en adelante «Convención de Viena de 1963».

vez de constituir una limitación de la soberanía en sentido absoluto, se basa en el consentimiento mutuo general de los Estados. Del mismo modo, la falta de jurisdicción no tiene nada de absoluto en el contexto de la aplicación de la inmunidad estatal. Si la falta de jurisdicción fuese absoluta, aunque se diese el consentimiento o se procediese a la renuncia, el Estado territorial no podría ejercer jurisdicción.

5. El Relator Especial se ha referido, en relación con el derecho de la India, a la aplicación del principio de inmunidad aun en los casos en que, en circunstancias normales, el Estado tendría jurisdicción. La situación, según el parecer del orador, es que, cuando empieza a surtir efecto la inmunidad, la jurisdicción se suspende en virtud del consentimiento mutuo general de los Estados. Esto significa que, en casos concretos y con carácter recíproco, se puede renunciar a la inmunidad y el Estado de que se trate tendrá jurisdicción. En esa medida, hay en la inmunidad un fuerte elemento potestativo, tanto desde el punto de vista del Estado que la alega como del Estado que la otorga, que permite el ejercicio de la jurisdicción en caso de renuncia o de consentimiento por parte del Estado interesado.

6. Ninguna observación sobre el proyecto de artículo 7 será válida si no se tienen en cuenta las definiciones enunciadas en el apartado *b* del párrafo 1 del artículo 2 (A/CN.4/331 y Add.1, párr. 33) y en el inciso *iv* del apartado *b* del párrafo 1 del artículo 3 (*ibid.*, párr. 48)⁵, que se refieren respectivamente a las «autoridades [...] administrativas» y a las «facultades administrativas». Es evidente, pues, que el ejercicio de las atribuciones administrativas tiene que considerarse en un contexto distinto del judicial. De hecho, en el párrafo 13 de su informe (A/CN.4/340 y Add.1) el Relator Especial reconoce que la jurisdicción de un Estado puede no ser exclusivamente territorial. Sin perjuicio del contenido de los proyectos de artículos 8 a 11 inclusive, el artículo 7 ha sido redactado, a juicio del orador, en un contexto exclusivamente territorial, haciendo hincapié en la acción y resolución judiciales. Es posible, sin embargo, que el Relator Especial se proponga tratar la cuestión planteada en el párrafo 13 de su informe en otro contexto.

7. Por último, el orador expresa su preferencia por la variante A del párrafo 2 del artículo 7 y recomienda que el proyecto de artículo 7 se remita al Comité de Redacción.

8. El Sr. ŠAHOVIĆ está de acuerdo con Sir Francis Vallat en que convendría tener una idea más clara de las intenciones del Relator Especial con respecto a los artículos siguientes al artículo 7. Tal vez hubiera sido conveniente que presentase a la Comisión un plan general de todo el proyecto, pues el tercer informe no se limita a exponer principios generales, sino que plantea también ciertas cuestiones que sólo se podrán resolver después de un análisis preciso de la práctica y las varias fuentes en que la Comisión debe basar sus trabajos.

9. Como se desprende de la información presentada por los gobiernos (A/CN.4/343 y Add.1 a 4), la Comi-

sión debe tomar en cuenta la creciente diversidad de los sistemas jurídicos. No cabe duda de que debe basar las nuevas normas en la práctica y las leyes contemporáneas de los Estados, antes que en la doctrina, aunque sin prescindir de las normas más antiguas, que conviene adaptar a la situación actual.

10. En su informe, el Relator Especial dedica todavía gran atención a las bases generales y a la naturaleza de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados, aunque ese aspecto ya no sea fundamental en el presente estado de los trabajos de la Comisión, que en adelante deben concentrarse decididamente en la práctica. Las cuestiones teóricas, por interesantes que sean, suscitan opiniones inevitablemente divergentes, como demuestran los debates de la Comisión, cuando lo que importa es preparar un proyecto orientado primordialmente a la solución de problemas concretos. Convendría, por lo tanto, que el Relator Especial concentrase su análisis en la práctica de los Estados y propusiera a la Comisión proyectos de artículos que permitiesen avanzar más allá de la etapa preliminar.

11. En el texto del tercer informe figuran las expresiones «concepto más fundamental [...] de soberanía» y «principio más básico de soberanía» (A/CN.4/340 y Add.1, párrs. 7 y 8), que el Relator Especial ha utilizado para referirse a la teoría de la soberanía absoluta. El orador señala que la Comisión ha comprobado ya que esa teoría indudablemente está perdiendo apoyo y observa que no pueden existir grados de soberanía. La soberanía existe como hecho y como atributo de todo Estado que participa en las relaciones jurídicas internacionales. A juicio del Sr. Šahović, un análisis basado en tal planteamiento difícilmente podría conducir a la formulación de disposiciones de carácter práctico destinadas a ser incluidas en un proyecto de artículos.

12. En cuanto al «nuevo punto de partida» que se menciona en el párrafo 9 del informe, el orador estima que la base general del proyecto debería ser más bien el principio de cooperación entre los Estados, que debería permitir resolver la cuestión práctica de la inmunidad jurisdiccional teniendo en cuenta los intereses recíprocos de los Estados de que se trate. Cualquier otra solución llevaría inevitablemente a un punto muerto debido a la oposición de dos soberanías rivales igualmente fuertes. El proyecto de artículos debe resolver, en efecto, una serie de problemas relativos a los derechos y obligaciones de las dos partes y a las circunstancias concretas de la inmunidad jurisdiccional de los Estados. De no perseguir deliberadamente esa finalidad, la Comisión podría limitarse a preparar un proyecto de diez artículos, aproximadamente, en el que tratase de resolver, por el método tradicional, el problema de la inmunidad jurisdiccional, al que no suele dedicarse más de dos o tres páginas en los tratados de derecho internacional. El aspecto más importante de la labor de la Comisión radica en las conclusiones que hay que deducir de la noción de consentimiento de los Estados para resolver el problema de la reciprocidad basándose en un estudio de la práctica.

13. Por lo que respecta al proyecto de artículo 7, el orador se refiere a las reservas que expresó en el anterior período de sesiones cuando se aprobó en primera

⁵ Véase también 1653.ª sesión, nota 5.

lectura el proyecto de artículo 6⁶ y sugiere la conveniencia de redactar nuevamente dicho artículo a la luz de la formulación propuesta para el párrafo 1 del proyecto de artículo 7. Se podría así aclarar el alcance del concepto de las inmunidades jurisdiccionales. No obstante, la finalidad del párrafo 1 del proyecto de artículo 7 no es del todo clara, en particular a causa de la redacción de la segunda parte de la frase, a partir de las palabras «aun cuando en virtud». La norma se enuncia negativamente y tal vez hace demasiado hincapié en el concepto de competencia.

14. Por lo que respecta a las variantes A y B del párrafo 2, el orador se inclina por una formulación general, pero clara. Habida cuenta de que en la variante B se expresan dos ideas en la misma disposición, se pronuncia en favor de la variante A. No obstante, a semejanza de otros miembros de la Comisión, considera que el concepto de implicación no es bastante claro y debe precisarse mejor.

15. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ señala que los debates del período de sesiones anterior ya habían puesto de manifiesto las dificultades que plantea la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados. Hay dos posibilidades: estudiar a fondo los principios generales aplicables en esta materia, con lo que se prolongaría la fase preliminar de los trabajos, o empezar a preparar inmediatamente el proyecto de artículos a fin de evitar toda pérdida de tiempo.

16. El tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados se presta perfectamente al desarrollo progresivo y exige la elaboración de un derecho nuevo. Conviene con el Sr. Šahović en que un estudio prolongado de la doctrina no puede dar resultados satisfactorios, puesto que los puntos de vista de los Estados y las prácticas que éstos aplican han sido siempre muy diferentes en lo que respecta a las inmunidades jurisdiccionales, que constituyen un privilegio cuyo alcance viene definido por el Estado que lo concede.

17. La soberanía, al ser el fundamento mismo de la igualdad jurídica de los Estados, no admite reservas. Advierte que el Sr. Ushakov ha señalado que el Estado que concede un privilegio lo hace en previsión de lo que puede recibir en reciprocidad y, por lo tanto, a fin de salvaguardar sus propios intereses.

18. Conviene con Sir Francis Vallat (1653.ª sesión) en que sería difícil adoptar una decisión válida sobre los artículos del proyecto aprobados en el anterior período de sesiones, o sobre el proyecto de artículo 7, sin conocer las disposiciones siguientes. Además, el Relator Especial ha procurado presentar un proyecto de artículo 7 formulado con suficiente flexibilidad para disipar toda duda posible y permitir a la Comisión avanzar en sus trabajos sin esperar a que se hayan resuelto todas las dificultades preliminares.

19. El principio de la soberanía se reconoce universalmente como fuente del poder jurisdiccional de los Estados y el proyecto de artículos tiene por objeto regular las excepciones a tal principio. Ahora bien, la base del

proyecto no puede ser una doctrina ni una definición fundamental del derecho internacional, sino que debe radicar en la práctica de los Estados, en la que hay que buscar el denominador común para traducirlo en una serie de disposiciones.

20. Puede aceptar el proyecto de artículo 7 presentado por el Relator Especial, siempre que los textos de ese artículo y de los artículos 1 y 6 se consideren como simples orientaciones sujetas a revisión. Apoya asimismo las modificaciones de forma propuestas por el Sr. Calle y Calle en la sesión anterior.

21. En cuanto a las variantes A y B del párrafo 2, es partidario de la primera, que es más general y probablemente la que mejor contribuiría al avance de los trabajos de la Comisión.

22. Por último, conviene con el Sr. Tsuruoka en que se debe seguir avanzando basándose en la práctica y comparte el punto de vista de Sir Francis Vallat de que la Comisión no puede adoptar ninguna decisión definitiva mientras no haya hecho un estudio más a fondo de las fuentes disponibles.

23. El Sr. QUENTIN-BAXTER puede entender perfectamente por qué el Sr. Ushakov considera que los artículos aprobados el año anterior no proporcionan firmes cimientos en los que basar los trabajos. Sin embargo, la falta en las etapas iniciales de una base sólida para los trabajos futuros no es en modo alguno característica de este tema; existen frecuentemente verdaderas dificultades para elaborar dichas bases hasta que no se realiza un amplio cambio de impresiones. Por eso no alcanza a ver ninguna posibilidad inmediata de volver a la materia objeto de los proyectos de artículo 1 y 6, y estima que la Comisión debe, como ha sugerido el Relator Especial proseguir sus trabajos teniendo en cuenta dichas disposiciones.

24. Otros oradores han señalado acertadamente que hay excelentes motivos para que la Comisión tenga dificultades en determinar la esencia del tema estudiado. La Comisión, cuando estudió el problema de las relaciones e inmunidades diplomáticas, pudo partir de una proposición universalmente aceptada; la institución de la diplomacia se consideraba inseparable de las inmunidades que hacían posible el desempeño de sus funciones. Al ocuparse de la inmunidad soberana, o de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados soberanos y de sus organismos, la Comisión tiene que examinar una amplia gama de situaciones, desde las que se refieren a un jefe de Estado en viaje a las relativas a los bienes que pueden o no estar estrechamente relacionados con las actividades soberanas de un Estado. Es sumamente difícil extraer de ese contexto los factores que pueden llevar desde los comienzos a la redacción de artículos estructurados.

25. Sin embargo, al igual que varios otros oradores, alcanza a discernir un principio de diferenciación con respecto al concepto de consentimiento. Independientemente de si la inmunidad precede al consentimiento o viceversa, la cuestión de la inmunidad se suscita únicamente cuando un Estado admite en su territorio manifestaciones de una soberanía extranjera. Este intercambio de inmunidad por consentimiento constituye hasta

⁶ Véase *Anuario... 1980*, vol. I, pág. 204, 1624.ª sesión, párr. 26; y pág. 267, 1634.ª sesión, párrs. 54 a 56.

tal punto parte de ciertos aspectos de la vida internacional que puede considerarse que la propia inmunidad es la norma básica; pero, en esferas ajenas a ese indiscutible núcleo esencial, debe hacerse la pregunta de a qué han dado su consentimiento los Estados en sus relaciones mutuas. Claramente se desprende de las sentencias judiciales y de la doctrina que desde el primer momento se ha hecho la distinción entre consentimiento expreso y consentimiento tácito, entre los tipos de actividad —como el paso en tiempo de paz de los buques de un Estado por las aguas territoriales de otro Estado— para cuya realización puede presumirse el consentimiento tácito y la consiguiente inmunidad que acompaña a dicho consentimiento, y los tipos de actividad respecto de los cuales el consentimiento debe ser expreso para que la inmunidad exista.

26. Esto lleva a la cuestión del conocimiento. En el complejo mundo de hoy son normales las manifestaciones de una soberanía extranjera en el territorio de un Estado sin que las autoridades de dicho Estado tengan especial conocimiento de su existencia. Desde el punto de vista jurídico, tales situaciones inmediatamente plantean la cuestión de a qué han dado su consentimiento los Estados territoriales interesados: ¿cabe decir, por ejemplo, que han convenido en la prosecución, en sus respectivos territorios, de cualesquiera tratos que normalmente están sujetos a sus propias autoridades y que implicarían la inmunidad si se hiciera patente que guardan una relación suficientemente estrecha con otro Estado soberano? En su opinión, ni la práctica ni la razón justifican una presunción tan general.

27. Con todo, existe en lo que respecta a la concesión de inmunidad por actividades comerciales una tendencia apreciable a la aplicación, no de una distinción compleja y sutil entre actos de soberanía y otro tipo de actos, sino del criterio sencillo y práctico de preguntar si la actividad versa únicamente sobre el comercio y si el soberano cuyos intereses están en juego ha entrado en el mercado de su propia voluntad. Los precedentes más importantes en esta materia se encuentran en la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua⁷ y en la Convención sobre la alta mar⁸, adoptadas en Ginebra en 1958, y parece que esos criterios cada vez se aplican más en el comercio internacional. Los criterios de ese tipo son, a su juicio, más fundamentales que el criterio de competencia, al que el Relator Especial ha dedicado especial atención en su tercer informe (A/CN.4/340 y Add.1).

28. Reconoce plenamente la existencia de una relación muy sutil entre la competencia de un Estado y la concesión de inmunidades, así como la posibilidad, por ejemplo, de que se presenten casos en que sea necesario determinar si un órgano renuncia a actuar por razones de inmunidad o a causa de su propia falta de competencia. Sin embargo, la postura generalmente adoptada en cuestiones de derecho internacional es no investigar la organización interna de los Estados ni aceptarla como justificación de la renuncia de normas inter-

nacionales. Se pregunta además si es realmente necesario preocuparse por el problema de la competencia en el caso del proyecto de artículos: si los órganos del Estado carecen de la competencia requerida, es de suponer que no actúen, con lo que no se planteará la necesidad de solicitar la inmunidad; si, por otra parte, surge esa necesidad, la cuestión de si un órgano determinado tiene una determinada competencia no será un elemento del problema. Como ha señalado el Relator Especial, la competencia es la esencia de la norma según la cual ningún Estado debe tratar de ampliar su propia jurisdicción de forma que interfiera con las actividades de otros Estados soberanos dentro de las fronteras de éstos; pero, en la medida que él mismo puede juzgar, este tipo de cuestión no se suscita directamente en el proyecto de artículos.

29. Considera que en el proyecto de artículo 7 el Relator Especial ha presentado a la Comisión dos artículos, ya que la afinidad de intereses entre el párrafo 1 y una y otra versión del párrafo 2 no es tan grande que hayan de incluirse finalmente en una misma disposición. El párrafo 1 trata, en los términos más amplios posibles, de la sumisión de un Estado a la jurisdicción de otro. Sirve para recordar al lector la proposición básica de que los Estados actúan por medio de todos los órganos de su Administración y la obligación de observar, en las circunstancias a que se refiere el proyecto de artículos en su totalidad, los requisitos, cualesquiera que sean, de la ley de inmunidades soberanas. Ambas versiones del párrafo 2 se centran en los órganos de la Administración de Justicia, cumpliendo de esta forma el requisito que ha de abordarse al principio del proyecto de artículos.

30. Por lo que respecta a la variante A, tiene ciertas dudas sobre el significado que ha de darse al término «implead». En el párrafo 28 de su informe, el Relator Especial da a entender que entraña cierta idea de compulsión, la realización de algo contra la voluntad de alguien. Aunque es realmente una idea muy extendida en el derecho inglés de inmunidades soberanas que ningún Estado soberano puede ser «impleaded» (demandado en juicio) contra su voluntad, en este contexto la palabra se utiliza con carácter neutro. Por consiguiente, agradecería que se aclarase el sentido en que se emplea el término en el proyecto de artículo: ¿significa simplemente que el Estado interesado ha de ser considerado parte en el procedimiento, o tiene un significado más amplio, en el sentido de que están implicados los intereses jurídicos de esa parte?

31. En el párrafo 29, el Relator Especial aborda la cuestión del alcance del concepto de «Estado». A este respecto ha empleado en la variante B del párrafo 2 del artículo 7 términos muy semejantes a los utilizados por Lord Atkin cuando en el asunto del *Cristina* (1938)⁹ formuló, en los términos tal vez más amplios utilizados en un tribunal inglés, la proposición de que la inmunidad se aplica no solamente cuando un Estado es parte en un proceso, sino también cuando el procedimiento judicial afecta de alguna forma al destino o uso de bie-

⁷ Naciones Unidas, *Recueil des Traités*, vol. 516, pág. 241.

⁸ *Ibid.*, vol. 450, pág. 115.

⁹ *Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940*, Londres, 1942, asunto N.º 86, pág. 250.

nes de su propiedad, en su posesión o bajo su control. Esa opinión ejerció una fuerte influencia en los fallos relativos a cuestiones de inmunidad dictados en los tribunales del Reino Unido y otras jurisdicciones británicas, llevando a una aplicación cada vez más absoluta de las normas de inmunidad. Por otra parte, los propios tribunales expresaron dudas sobre esa práctica, y el otro gran sistema de *common law*, el de los Estados Unidos de América, se desvió de ella muy pronto. De hecho un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos puso sumo cuidado en afirmar que la prueba de la propiedad, posesión y control era imposible de aplicar coherentemente y que tenía tales ramificaciones que no podía servir de base a una distinción jurídica adecuada. Esta opinión se ha visto en realidad confirmada por los hechos, ya que el propio sistema de *common law* ha rechazado la distinción por disposición legislativa. De hecho, una de las mayores dificultades del Relator Especial al analizar los principios generales en materia de inmunidad soberana es tener que hacerlo en el momento mismo en que los propios Estados están revisando esta materia y, en algunos casos, anulando los efectos de una larga serie de precedentes.

32. Habida cuenta de esas consideraciones, estima que las dos versiones propuestas del párrafo 2 del artículo 7, en especial la variante B, van demasiado lejos. Considera que la Comisión empezará por lo menos a vislumbrar lo que debe constituir el núcleo del proyecto de artículos si se atiene al proceso natural de diferenciación por el consentimiento, el conocimiento y la aplicación del criterio de actividad comercial o no comercial, pero que, si atribuye demasiada importancia a criterios como los de la propiedad, la posesión y el control, se encontrará ante las mismas dificultades con que tropezaron los sistemas judiciales que las crearon.

33. Sir Francis VALLAT dice que, pese a estar en gran parte de acuerdo con el Sr. Quentin-Baxter en que resolver la cuestión del consentimiento supone acercarse mucho al centro del tema, estima que un requisito más fundamental todavía es la necesidad de conseguir un equilibrio adecuado entre la soberanía de cada uno de los dos Estados que pueden ser partes en un asunto determinado. Ha de tenerse cuidado para no favorecer los intereses del Estado territorial a costa de los del Estado «que envía» y viceversa. Es más, debe buscarse ese equilibrio en el contexto de las necesidades de fines de siglo XX y no de las circunstancias muy distintas que imperaban en los siglos XVIII y XIX.

34. Relacionado con esa idea de equilibrar los intereses de Estados soberanos hay un aspecto que ha sido claramente puesto de relieve por el Sr. Ushakov (1654.ª sesión), a saber, el hecho de que la soberanía no es un concepto absoluto. Como dijo Lord McNair, uno de los atributos de la soberanía es la capacidad para aceptar limitaciones a su ejercicio; de igual forma es uno de los atributos de un Estado soberano la capacidad para vivir en el marco del derecho internacional público, que necesariamente implica límites en el ejercicio de la soberanía. Por consiguiente, la cuestión de si un Estado debe someterse a la jurisdicción de otro Estado o de si este último debe conceder al primero la inmunidad es fundamentalmente un problema práctico relacionado

con la naturaleza de la soberanía. Esta es la posición básica desde la que el orador aborda el proyecto de artículos.

35. Por eso considera con cierta reserva muchos de los precedentes en forma de sentencias de tribunales nacionales. El Relator Especial ha observado acertadamente en las decisiones del Reino Unido, y en especial de los tribunales ingleses, una firme tendencia a conceder la inmunidad a los soberanos extranjeros. Es importante, sin embargo, tener presente a este respecto que esa tendencia tiene su origen en la era imperial del Reino Unido. Hay que tener también en cuenta hasta qué punto los tribunales ingleses se han considerado históricamente vinculados por las sentencias de sus predecesores. Sólo en el último decenio, aproximadamente, el tribunal supremo de apelación del Reino Unido, la Cámara de los Lores, ha quedado libre de la estricta aplicación de la doctrina de *stare decisis*. Así, pues, si bien es cierto que los tribunales del Reino Unido han elaborado y aplicado la práctica de la concesión de la inmunidad absoluta de soberanía tanto en lo que concierne a los Estados como a sus bienes, Sir Francis hace votos por que la Comisión se guíe, no por ese ejemplo, sino por la actual legislación del Reino Unido, especialmente la Ley de inmunidad de los Estados, de 1978¹⁰, que pone claramente de manifiesto el abandono de la orientación anterior. Por lo que respecta a esa orientación, cabe destacar la notable falta de precedentes judiciales internacionales que sienten algo parecido a un principio de inmunidad absoluta para los Estados extranjeros y sus bienes.

36. Por lo que respecta al proyecto de artículo 7, está de acuerdo en especial con las observaciones del Sr. Tsuruoka y el Sr. Pinto (1654.ª sesión). Sigue creyendo que será necesario ver los artículos siguientes antes de adoptar una decisión definitiva sobre el texto de la disposición, pero tras el debate en la Comisión nada tendrá que objetar a que se remita el artículo, tal como figura en el párrafo 44 del tercer informe del Relator Especial, al Comité de Redacción. La única observación que desea hacer es que considera la variante B demasiado detallada y, por lo tanto, muy poco acorde con el método gradual tan acertadamente adoptado por el Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

¹⁰ Reino Unido, *The Public General Acts, 1978*, Londres, H. M. Stationery Office, primera parte, cap. 33, pág. 715. Texto de la ley reproducido en: American Society of International Law, *International Legal Materials*, Washington (D.C.), vol. XVII, N.º 5, septiembre de 1978, pág. 1123. Para una traducción española de la ley, véase A/CN.4/343/Add.1, págs. 22 y ss.

1656.ª SESIÓN

Jueves 21 de mayo de 1981, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM